

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 29
O R D I N A R I A
LUNES 14 DE MARZO DE 2016

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos del lunes catorce de marzo de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Se sometieron a consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas números cinco solemne conjunta y veintiocho ordinaria, celebradas el jueves diez de marzo del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes catorce de marzo de dos mil dieciséis:

I. 89/2014

Controversia constitucional 89/2014, promovida por el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo Federales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, únicamente en la porción normativa que indica: “y Municipios”, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutive de esta sentencia al Congreso de la Unión. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno al apartado VIII, relativo a las consideraciones y fundamentos.

El señor Ministro Medina Mora I. concordó en que la libertad de administración hacendaria no impide que la Federación pueda limitar los recursos públicos a los concesionarios sujetos a su regulación, de conformidad con la competencia exclusiva para legislar sobre concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, otorgada por los artículos 28 y 73, fracción XVII, constitucionales.

Consideró, de la lectura integral de la norma impugnada, que se trata de una limitación dirigida a los concesionarios respecto de los montos que pueden recibir por venta de publicidad tanto por entes públicos federales como entidades federativas y municipios, por lo que no resulta inconstitucional o inválida, aunado a que persigue un fin constitucionalmente legítimo: preservar el carácter no lucrativo de estas concesiones de uso social.

Por otro lado, recordó que la regulación anterior establecía este tipo de concesiones como permisionarias y, por lo tanto, no podían recibir recursos directamente por la venta de publicidad, por lo que la medida prevista por la legislación vigente consiste en una acción que les ayuda a fortalecer sus ingresos, a efecto de que puedan desarrollar de la mejor manera sus actividades, pero tampoco se debe llegar al punto de equiparlos con los concesionarios de uso

comercial. Por esas razones, consideró que el precepto debe declararse válido.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó que el precepto combatido constituye un límite de financiamiento para los concesionarios de uso social, pero no para la libre administración de la hacienda municipal, siendo que utiliza simplemente un referente —el uno por ciento del presupuesto municipal— que debe tomar en cuenta el concesionario, pues es imposible que sepa a cuánto equivale ese uno por ciento si el municipio no lo señala.

Por lo tanto, al ser un simple referente, la medida no conlleva un límite a la administración de la hacienda. Recapituló que anteriormente los concesionarios de uso social tenían la calidad de permisionarios, por lo que sólo podían obtener ingresos de las fuentes por la norma entonces vigente porque, a diferencia de los concesionarios de uso comercial, no tienen fines de lucro.

Actualmente, el artículo 89, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que los concesionarios de uso social no pueden transmitir mensajes comerciales ni vender publicidad, con excepción de lo previsto en su diversa fracción VII, en la cual autoriza la venta de publicidad a los entes públicos federales, estatales y municipales, y se impone la obligación a cargo de los primeros —entes federales y estatales— a destinar el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y

publicidad, autorizado en sus respectivos presupuestos, al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas en el país, y a los municipios se les deja en libertad de autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos, lo que implica la posibilidad a esos concesionarios de obtener ingresos por concepto de publicidad con los límites establecidos por el legislador federal, que es el competente para legislar en materia de telecomunicaciones, el cual no interfirió con la libre administración de la hacienda pública municipal, pues no impuso ninguna obligación a cargo de los municipios al respecto. Por ello, consideró que la norma debe considerarse constitucional.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea observó que el proyecto argumenta que, a partir del derecho de los municipios para manejar libremente su hacienda por mandato del artículo 115 constitucional, la norma en estudio, al establecer que solamente podrán destinar el uno por ciento de sus presupuestos para publicidad en concesiones de uso social, particularmente las comunitarias o indígenas, vulnera dicho derecho; sin embargo, estimó que el problema resulta más complejo, por lo que se debe interpretar sistémicamente la Constitución, partiendo del supuesto de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es reglamentaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Señaló que dicha reforma tuvo distintos objetivos: organizar el mercado de las telecomunicaciones, combatir monopolios y tratar de evitar distorsiones, entre otros; por esa razón, el artículo 28 prevé que “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”, por lo que la ley que emita la Federación reglamentará también a las concesionarias de uso social, siendo que la lógica constitucional y legal coincide en que no tienen una finalidad de lucro, máxime que las diversas fracciones del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación prevé las fuentes de sus recursos: “I. Donativos en dinero o en especie; II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio; III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo; IV. Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización; V. Arrendamiento de estudios y servicios

de edición, audio y grabación; VI. Convenios de coinversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público”.

Respecto de la diversa fracción VII impugnada, cuyo texto cita “Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos”, precisó que, excepcionalmente, permite a estos concesionarios tener esta especie de recursos, estableciéndolo como una medida positiva para que necesariamente los entes federales tengan que destinar ese monto y, por lo que hace a las entidades federativas y a los municipios, prevé que podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos.

En ese contexto, estimó que esta medida, lejos de representar una disposición cuya finalidad atente o afecte la libre hacienda de los municipios, al tener como destinatarios a los concesionarios de uso social, comunitario o indígena, constitucionalmente resultan válidas porque tienden a lograr las finalidades de la citada reforma, además de que, en relación con el artículo 134 constitucional y la atribución

dada por el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce —cuyo texto reza “El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”—, la medida está relacionada con el tema de la comunicación gubernamental y la propaganda gubernamental.

Concluyó que, de no reconocerse la validez del precepto, se podría generar una asimetría insana en el mercado y en la comunicación social, puesto que quedarían los entes federales con la obligación de invertir hasta el uno por ciento, quedarían las entidades federativas con el tope del uno por ciento pero, por otro lado, los municipios no tendrían ninguna limitación al respecto, lo cual no fue la intención del legislador. En esos términos, se pronunció por la validez del precepto.

El señor Ministro Franco González Salas recordó que en diversos asuntos se ha posicionado en el sentido de que la libertad en el manejo de la hacienda municipal no es absoluta, sino que se pueden imponer obligaciones cuando se justifiquen, como fue en los casos del porcentaje para el costo de las universidades en sus territorios. En la especie, indicó que la medida tiene una justificación derivada de la estructura constitucional tras las reformas citadas para dar un trato diferenciado a este tipo de radiodifusoras; sin embargo, consideró que, en suplencia de la queja, podría considerarse que el precepto no es claro y, por tanto, provoca inseguridad jurídica, en el sentido de que el artículo 89, fracción III, de la ley en estudio prohíbe en principio que este tipo de radiodifusoras tengan acceso a compra de publicidad, siendo que su diversa fracción VII prevé la venta de publicidad a entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos, lo cual implica una distribución equitativa, mientras que a las entidades federativas y municipios los limita a autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos.

En ese tenor de ideas, al existir un límite impuesto a los municipios para el uso de su hacienda pública en el sentido negativo, se genera una desigualdad, en la medida en que todos los municipios cuentan con diversos montos presupuestarios, lo cual impactará, a su vez, con los que recibirá la radiodifusora respectiva, provocando que unas

reciban más que otras, lo cual no se justifica porque, de los trabajos legislativos tanto constitucionales como de la ley en cuestión, se pretendía que estas concesionarias no tuvieran fines de lucro y, por lo mismo, no tienen que cubrir los requisitos que tienen las otras radiodifusoras comerciales.

Estimó que el legislador pudo acudir a otros medios para establecer esta limitación y, al mismo tiempo, establecer una distribución equitativa de recursos entre concesionarias porque, finalmente, pueden tener diferentes requerimientos para su funcionamiento y, probablemente, las que están en condiciones más extremas requirieran mayor apoyo, pero la norma las limita. Por estas razones, se manifestó de acuerdo con el sentido del proyecto, por diferentes consideraciones.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recordó haber modificado el proyecto para proponer la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa “hasta el uno por ciento”, de tal forma que los municipios, en ejercicio de su autonomía municipal, pudieran gastar libremente en apoyo a las radios comunitarias de sus propios presupuestos.

Modificó el proyecto, dadas las intervenciones de los señores Ministros Pardo Rebolledo y Franco González Salas, para retomar la propuesta de invalidez original.

Consideró que la libre administración hacendaria municipal es de carácter constitucional, además de que ha

sido jurisprudencia reiterada de esta Suprema Corte dejar que los ayuntamientos manejen su presupuesto de la manera que mejor les parezca, con independencia de la responsabilidad política, administrativa o penal que, en su caso, corresponda; en el caso señaló que sucede lo mismo.

En cuanto al señalamiento de algunos señores Ministros en el sentido de que el artículo 28 constitucional prohíbe el ánimo de lucro de estas concesionarias, coincidió en que la medida en estudio responde a una deficiente técnica legislativa pues, si se pretendía limitar a las concesionarias de uso social, debió referir a los recursos que podía recibir ésta, y no aludiendo a un límite a los municipios. Independientemente de lo anterior, sostuvo el proyecto en estos términos, a la espera de la votación respectiva.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que en la sesión pasada su postura consistió en que el precepto impugnado es atentatorio de la libertad presupuestal de los municipios porque, aun si bien pudiera implicar una acción positiva para garantizar la subsistencia de estos concesionarios de uso social, enfocó mal la restricción porque la hizo depender de un porcentaje del presupuesto municipal y no en una limitación o prohibición directa a estos concesionarios de no exceder determinado límite, atendiendo a la finalidad constitucional de que no tienen fines de lucro.

No obstante, observó que en la propia ley existen restricciones dirigidas *ex profeso* a los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias de radiodifusión, como en el artículo 237, fracción III, el cual se analizará en asuntos futuros, cuyo lectura indica “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, así como los programadores y operadores de señales, deberán mantener un equilibrio entre la publicidad y el conjunto de programación transmitida por día, para lo cual se seguirán las siguientes reglas: III. Para los concesionarios de uso social indígenas y comunitarias de radiodifusión: a) En estaciones de televisión, el tiempo destinado a venta de publicidad para los entes públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no excederá del seis por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación, y b) En estaciones de radio, destinado a venta de publicidad para los entes públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no excederá del catorce por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación.”, por lo que, aun eliminando la porción normativa que se discute, estas restricciones son perfectamente aplicables a este tipo de concesionarios, además de que no se relacionan con el presupuesto de los municipios. Por estas razones, se pronunció a favor del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que el artículo 237, fracción III, representa el equilibrio respecto del diverso 89, fracción VII. Recordó que el 89, fracción III, establece

que las concesionarias de uso social genéricamente no pueden comercializar, pero la diversa fracción VII establece la excepción por transmisión de publicidad oficial con dos circunstancias diferenciadas: 1) para la autoridad federal, la obligación de disponer del uno por ciento repartido equitativamente para el sostenimiento de este tipo de concesiones, y 2) para las entidades federativas y los municipios, la posibilidad de destinar hasta el uno por ciento de su presupuesto. Apuntó que la suma de los anteriores porcentajes remite al artículo 237, fracción III, que más adelante se estudiará, el cual prevé que su monto no podrá exceder del seis por ciento para la televisión y del catorce por ciento para la radio y, por lo tanto, no se entendería una norma sin la otra, por lo que la invocación del artículo 237 resultaría necesaria para justificar la validez de la disposición que ahora se analiza, pues redondea integralmente los fines de la ley y demuestra una proporción en la medida.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz resaltó que no se está analizando la viabilidad de la ley, sino un problema de constitucionalidad a partir del artículo 115, fracción IV, y la libertad hacendaría de los municipios.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VIII, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en declarar la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa correspondiente, respecto de la cual se expresó una mayoría

de ocho votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas por diversas razones y Pardo Rebolledo votaron a favor.

Dada la votación alcanzada, consistente en una mayoría en contra del proyecto y por el reconocimiento de validez de la norma en cuestión, a propuesta del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el Tribunal Pleno acordó encargar la elaboración del engrose al señor Ministro Laynez Potisek, con la anuencia de éste, así como que se analice dicho engrose en sesión privada. Por tanto, la votación deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VIII, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en reconocer la validez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Pardo Rebolledo votaron en contra.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

“PRIMERO. Es parcialmente procedente e infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta conjunta con los siguientes tres asuntos de la lista:

II. 93/2014

Controversia constitucional 93/2014, promovida por el Municipio de Bejucal de Ocampo, Estado de Chiapas, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo Federales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, únicamente en la porción normativa que indica: “y Municipios”, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

III. 95/2014

Controversia constitucional 95/2014, promovida por el Municipio de Cuauhtémoc, Estado de Colima, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo Federales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia*

constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, únicamente en la porción normativa que indica: “y Municipios”, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

IV. 98/2014

Controversia constitucional 98/2014, promovida por el Municipio de Ciudad Ixtepec, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo Federales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: “*PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo*

89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, únicamente en la porción normativa que indica: “y Municipios”, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III, IV, V y VI relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite de la controversia constitucional, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VII, relativo a las causas de improcedencia, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de la desestimación de la causa de improcedencia planteada por litispendencia.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, en cuanto a sobreseer respecto de los artículos 89, fracción III, y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz anunció que sostendría estos proyectos en los términos en que sostuvo la controversia constitucional 89/2014.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VIII, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en declarar la invalidez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa “Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos”, respecto de la cual se expresó una mayoría de ocho votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek,

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas por diversas razones y Pardo Rebolledo votaron a favor.

Dada la votación alcanzada, consistente en una mayoría en contra del proyecto y por el reconocimiento de validez de la norma en cuestión, a propuesta del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el Tribunal Pleno acordó encargar la elaboración de los engroses al señor Ministro Laynez Potisek, con la anuencia de éste. Por tanto, la votación deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VIII, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en reconocer la validez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Pardo Rebolledo votaron en contra.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán los referidos asuntos, de la siguiente forma:

“PRIMERO. Es parcialmente procedente e infundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 89, fracción III, y 90,

fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que estos tres asuntos se resolvieron en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

V. 90/2014

Controversia constitucional 90/2014, promovida por el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, en contra de los Poderes Legislativos y Ejecutivo Federales, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Decreto por el que se expiden las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público

de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 3º, fracción XLVI, 9, fracciones I, II, III, IV, IX, XII, XIII, XIV, XVI; XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 15, fracciones XX, XXII, LX, LXII, 89, fracciones III y VII, 90, párrafos cuatro, cinco y seis, 100, 119, 120, 131, 144, párrafo tres, 177, fracción VII, 190, fracciones I, II y VII, 194, 206, 208, 217, fracciones I y VI, VII, VIII, IX, X, 219, fracciones III y V, 232, 233, 234, 235, 236, 297, 262, último párrafo, 263, 265, 266 fracciones XVI y XXII, 267, párrafos primero y antepenúltimo, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, párrafo tres, 277, 284, 285, 286, 287, 288, 297, párrafo dos, 299, 300, 308, 311, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 39, fracción VII, 68, 70 y 71 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 27 y 144 de la Ley Federal de Derechos de Autor; Artículos Noveno Décimo párrafo tres, Décimo primero inciso a), Duodécimo, párrafos dos y tres y fracciones IV, VI, VIII y X, Cuadragésimo, Cuadragésimo primero y Cuadragésimo quinto Transitorios del Decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en los términos del apartado VII de esta resolución. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 237, fracción III, de la Ley*

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión únicamente en las porciones normativas que indican: “y Municipios”, de conformidad con el apartado VIII de esta resolución. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.”

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó el asunto. Preciso que se trata de un paquete de asuntos similares al perteneciente al señor Ministro Cossío Díaz, incluso con un criterio parecido, aunque en éstos se propone el sobreseimiento respecto de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Derechos de Autor, y en el fondo se analiza el artículo 237 de la primera normativa, con un criterio de invalidez. Ante la discusión recién suscitada que culminó con el reconocimiento de validez de la norma respectiva, anunció que había distribuido hojas de adenda para proponer una posible modificación al estudio de fondo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite de la controversia constitucional, a la competencia y a la oportunidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña

Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los apartados V y VI relativos, respectivamente, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales no se manifestó convencido con la legitimación activa del municipio promovente, pues advirtió que no argumenta una afectación a sus competencias, sino una defensa a las organizaciones implicadas, al considerar que las normas les dan un trato desigual.

La señora Ministra Piña Hernández concordó en que, aun considerando que el artículo 237, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión alude al municipio, sus argumentos no se relacionan con una afectación a su esfera competencial, sino que implican cuestiones de discriminación o desigualdad entre concesionarios, máxime que la norma está dirigida a éstos y, por lo tanto, estaría por el sobreseimiento de dicho precepto.

El señor Ministro Pérez Dayán recapituló que, originalmente, este proyecto proponía la invalidez del precepto pero, derivado de la discusión al paquete de asuntos anteriores, se modificó para reconocer la validez con base en razonamientos similares, esto es, referentes a la

competencia constitucional del municipio respecto de su hacienda municipal.

En cuanto al señalamiento alusivo a que únicamente se argumentaron cuestiones de igualdad y no propiamente competenciales, reflexionó si el proyecto, al construirse sobre razonamientos competenciales, debería declarar la improcedencia del estudio en el fondo, o bien, trasladar el estudio de fondo hacia la improcedencia.

La señora Ministra ponente Luna Ramos corroboró que el concepto de invalidez del municipio no refiere a ningún problema competencial, sino a cuestiones de discriminación, y aclaró que se analizó en el fondo porque el precepto aludía al municipio. En ese sentido, recordó que, en algunos proyectos con el estudio de fondo se ha determinado que no es necesario éste pues debe sobreseerse, mientras que en otros se propone el sobreseimiento y se determina entrar al estudio de fondo, por lo que optó por la primera alternativa. Adelantó que estaría a lo que decidiera el Tribunal Pleno.

El señor Ministro Laynez Potisek coincidió con el señor Ministro Presidente Aguilar Morales en que el municipio promovente no tiene legitimación, puesto que la norma se dirige específicamente a los concesionarios, como indicó el señor Ministro Pardo Rebolledo en los asuntos anteriores, además de que la jurisprudencia P./J. 83/2011 (9a.) de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE

CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE” cita que “Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del Municipio para promoverla, le permitiera plantear argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio, sin importar si afectan o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla, exista un principio de afectación para la situación de hecho que detenten, esto es, como control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las controversias constitucionales”.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció en favor del proyecto porque sí existe un principio de afectación referente al artículo 2º, apartado B, fracción VI, constitucional, en tanto que el municipio quedaría sin tutela en esta materia.

El señor Ministro Medina Mora I. concordó con los señores Ministros Presidente Aguilar Morales y Laynez Potisek en que la norma reclamada regula directamente a los concesionarios de uso social, sin que esto represente una afectación a la competencia municipal para administrar libremente su hacienda y, sobre esa base y conforme a la

jurisprudencia leída, es procedente sobreseer respecto de esta disposición.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el sobreseimiento pues, a pesar de que está legitimado el municipio, carece de interés.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que no se trata de un problema de legitimación activa y coincidió con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en que el municipio tiene interés legítimo, conforme a lo que expuso en sesiones anteriores.

La señora Ministra ponente Luna Ramos secundó lo expuesto por los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de que es un problema de falta de interés legítimo, no de legitimación, esto es, el síndico está legitimado para representar al municipio, pero no tiene interés legítimo al no impugnar una cuestión competencial.

Adelantó que no tendría inconveniente en modificar el proyecto para incluir el sobreseimiento respecto del artículo 237, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El señor Ministro Pérez Dayán reflexionó que el municipio alegó que la limitación para la venta de publicidad afecta los ingresos de la hacienda municipal, pues le privan de obtener recursos para la financiación de los restantes servicios municipales, con lo cual el tema se involucraría con el fondo.

El señor Ministro Franco González Salas no se posicionó respecto del fondo, pero indicó que existe una relación entre los porcentajes previstos por el artículo 89, fracción VII, y el diverso 237, fracción III, inciso b), de la ley en estudio, por lo que, en principio, se debería entrar al estudio de fondo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados V y VI relativos, respectivamente, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para la siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la sesión privada, tras un receso, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes quince de marzo del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".